



BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

XV LEGISLATURA

Serie B:
PROPOSICIONES DE LEY

14 de noviembre de 2025

Núm. 274-1

Pág. 1

PROPOSICIÓN DE LEY

122/000230 Proposición de Ley relativa a la obtención de la nacionalidad española por residencia y la conservación de la nacionalidad de origen.

Presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(122) Proposición de ley de Grupos Parlamentarios del Congreso.

Autor: Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR

Proposición de Ley relativa a la obtención de la nacionalidad española por residencia y la conservación de la nacionalidad de origen.

Acuerdo:

Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos del artículo 126 del Reglamento, publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y notificar al autor de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2025.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, **Fernando Galindo Elola-Olaso**.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el artículo 124 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, presenta la siguiente Proposición de Ley relativa a la obtención de la nacionalidad española por residencia y la conservación de la nacionalidad de origen.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2025.—**Viviane Ogou i Corbi** y **Candela López Tagliafico**, Diputadas.—**Aina Vidal Sáez**, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.

PROPOSICIÓN DE LEY RELATIVA A LA OBTENCIÓN DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA POR RESIDENCIA Y LA CONSERVACIÓN DE LA NACIONALIDAD DE ORIGEN

Exposición de motivos

I

El marco normativo español en materia de nacionalidad por residencia se ha mantenido prácticamente inalterado durante décadas, a pesar de la profunda evolución del sistema de extranjería y de movilidad internacional. En concreto, el artículo 22.1 del Código Civil exige una residencia legal, continuada e inmediatamente anterior durante un mínimo de diez años para solicitar la nacionalidad española, excluyendo expresamente del cómputo los periodos de estancia, incluso cuando esta haya sido plenamente legal, autorizada y fiscalizada por la Administración del Estado. Esta omisión no refleja la complejidad actual del sistema migratorio español, que distingue entre residencia y estancia, pero reconoce ambas como formas de permanencia legal.

La autorización de estancia por estudios, prácticas o investigación permite a miles de personas extranjeras residir en España durante años, de manera legal y regular, para formarse o contribuir al sistema académico, científico y técnico del país. Sin embargo, estos años no son reconocidos a efectos de nacionalidad, lo que supone una exclusión jurídica sin justificación objetiva ni proporcional. Aunque los estudiantes internacionales residen de facto en España, pagan alquiler, servicios, consumen en el mercado nacional, cotizan en muchos casos a la Seguridad Social, y cumplen con los deberes fiscales, no se les reconoce su tiempo de estancia a efectos de nacionalidad. Esta situación crea una desigualdad estructural que debe ser corregida. A ello se suma una contradicción difícil de justificar: a efectos fiscales, estos estudiantes son considerados residentes, debiendo declarar sus ingresos globales en España conforme al régimen general, sin que exista distinción alguna. Es decir, para las obligaciones son residentes, pero para los derechos no se les reconoce como tales. Esta incoherencia refleja un tratamiento jurídico desigual e inconsistente.

El cambio normativo que separó la residencia de la estancia, pasando a clasificar a los estudiantes como meros «visitantes», ha generado una exclusión injustificada que se ha perpetuado durante más de dos décadas. A pesar de que en los años 2000 y 2001 se hablaba de «residencia por estudios», a partir del año 2002 se produjo este giro legislativo que desdibujó la condición de permanencia regular de miles de jóvenes en nuestro país. Lo más grave es que esta categoría se asimila a la de un turista, lo cual resulta abiertamente incompatible con el grado de integración que implica cursar estudios superiores, pagar matrículas internacionales, formar parte del tejido productivo y social, e incluso trabajar de forma legal.

Esta exclusión ha provocado que el tiempo que pasan en España los estudiantes bajo régimen de estancia no compute a efectos de nacionalidad, a diferencia de otras figuras como la residencia no lucrativa, que también impide trabajar, o de los ciudadanos comunitarios que pueden residir en España sin restricciones similares y cuyos años sí son tenidos en cuenta. Se trata de una doble discriminación si se tiene en cuenta que muchos de estos estudiantes han contribuido económicamente durante años al sistema, han cotizado mediante contratos de prácticas, becas remuneradas o trabajos, y sin embargo ven prolongado su acceso a la nacionalidad hasta los 14 o 16 años, mientras que en el resto de Europa los requisitos son mucho menores.

Francia, por ejemplo, exige cinco años de residencia legal, que pueden reducirse a dos si se ha cursado educación superior en el país; Bélgica permite la solicitud tras cinco años de residencia continua; y en los Países Bajos o Suecia, el plazo oscila entre los cinco y seis años. Es significativo que incluso países con gobiernos tradicionalmente más restrictivos, como Francia o Bélgica, computen el tiempo de estancia de los estudiantes internacionales sin establecer distinciones excluyentes como las que

mantiene España. Además, en la mayoría de estos Estados miembros no se exige reiniciar el cómputo desde cero tras un cambio de estatus migratorio, lo que refuerza su atractivo como destinos para talento internacional. Ningún país de la UE impone una distinción tan excluyente como la española, y España es el único que exige un plazo tan largo como diez años sin reconocer este tiempo previo de estancia legal.

La jurisprudencia y la propia evolución administrativa del Estado han comenzado a corregir esta anomalía. Por primera vez, en el Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, se hace referencia a la fórmula «de residencia o estancia» en el acceso al Bono Alquiler Joven, reconociendo de facto que la estancia debe tener efectos jurídicos equivalentes a la residencia en ciertos ámbitos. Este avance debería extenderse a otras áreas clave como el acceso a la nacionalidad, para evitar una contradicción normativa que afecta al principio de igualdad. Este mismo lenguaje ha sido también adoptado en el nuevo Real Decreto 1155/2024.

Además, conviene recordar que los estudiantes en régimen de estancia han sido históricamente excluidos de ayudas públicas como las becas MEC u otras convocatorias estatales o autonómicas. Por tanto, el Estado no ha asumido un coste relevante en su formación, pese a beneficiarse de su consumo interno, su actividad económica y en muchos casos de su cotización. A ello se suma que, en muchos casos, estos estudiantes deben abonar tasas académicas significativamente más altas por ser extracomunitarios, incluyendo penalizaciones por segundas, terceras o incluso cuartas matrículas. Resulta paradójico que estas personas, tras años de contribución efectiva, se vean obligadas a recomenzar el cómputo de residencia legal desde cero una vez logran cambiar su régimen a residencia, prolongando injustificadamente su acceso a la plena ciudadanía.

De hecho, según datos recientes de la OCDE y del informe Education at a Glance 2023, países como Francia, Alemania y Países Bajos se encuentran entre los destinos más atractivos para estudiantes internacionales gracias a políticas migratorias orientadas a la atracción de mano de obra cualificada y talento internacional. Francia, por ejemplo, supera los 370.000 estudiantes internacionales matriculados; Alemania más de 460.000; y Países Bajos más de 120.000, cifras muy superiores a las de España. Esta diferencia se explica, en parte, por los incentivos legales y el reconocimiento efectivo del tiempo de permanencia para la integración y la ciudadanía, elementos que España aún no ha alineado con sus objetivos estratégicos de internacionalización universitaria y atracción de talento.

A esta brecha competitiva se suma un dato económico clave: los estudiantes con estancia por estudios en España deben acreditar medios económicos equivalentes al 100 % del IPREM anual, es decir, un mínimo de 7.200 euros por persona. Según los últimos datos oficiales del Ministerio del Interior, en España residen legalmente más de 93.067 personas bajo el régimen de estancia por estudios a 31 de diciembre de 2024. Esto supone, como mínimo, una inyección directa de más de 670 millones de euros anuales procedentes del extranjero, que se incorporan a la economía nacional mediante consumo, pago de alquileres, servicios, transporte, tasas universitarias y otros gastos vinculados. A pesar de esta contribución directa, estas personas siguen siendo tratadas como visitantes temporales y excluidas del reconocimiento de arraigo que permite el acceso a la nacionalidad.

Modificar el artículo 22 para que contemple el tiempo de «residencia o estancia» como criterio válido es una medida de justicia y de coherencia con la realidad social y económica del país. Supone reconocer la contribución silenciosa de miles de jóvenes formados en nuestras universidades, integrados en nuestras comunidades y comprometidos con el futuro de España. Negarles el reconocimiento de ese tiempo supone no solo una injusticia individual, sino también una pérdida colectiva en términos de talento, diversidad y proyección internacional.

II

El artículo 23.b) del Código Civil impone, como condición para la adquisición de la nacionalidad española por residencia, opción o carta de naturaleza, la renuncia expresa a la nacionalidad anterior. Si bien existen excepciones reconocidas para nacionales de determinados países (como los iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal), el principio general sigue siendo el de la exclusividad nacional, un enfoque que resulta desfasado en el contexto jurídico actual y que plantea importantes objeciones tanto prácticas como de coherencia normativa.

En primer lugar, este requisito supone una barrera innecesaria y disuasoria para la integración de personas plenamente arraigadas en España. Obligar a renunciar a la nacionalidad de origen no solo impone una ruptura formal con el país de procedencia, sino también con vínculos afectivos, familiares, culturales e incluso patrimoniales. Esta exigencia tiene un efecto desproporcionado sobre los solicitantes, sin que ello redunde en una mayor garantía de compromiso con el Estado español.

En segundo lugar, la tendencia internacional —y particularmente europea— apunta hacia el reconocimiento generalizado de la doble nacionalidad. Francia, Bélgica, Italia, Suecia, Alemania (desde 2024), Irlanda o Luxemburgo permiten de manera ordinaria la conservación de la nacionalidad de origen. De hecho, España reconoce tácitamente la doble nacionalidad en múltiples contextos: no exige renuncia cuando se adquiere otra nacionalidad con posterioridad, ni la impone a quienes acceden a la nacionalidad española en virtud de tratados específicos. Esta incoherencia evidencia que el principio de exclusividad no es indispensable ni sistemáticamente aplicado.

Además, que conservar la nacionalidad de origen esté reservado a unas pocas nacionalidades, constituye un privilegio y no se adapta a la realidad sociopolítica actual, mientras se niega al resto de personas extranjeras igualmente arraigadas y comprometidas con el país. Este trato desigual —por razones históricas o geopolíticas— carece de justificación jurídica sólida y convierte a España en un caso excepcional a nivel mundial. Es probable que sea uno de los pocos, si no el único, Estados democráticos que aún mantienen este requisito con carácter general. Esta situación, además, contradice lo que ya ha sido asumido por órganos de participación estatales: el propio Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) ha propuesto eliminar este requisito, señalando que su supresión mejoraría tanto los derechos de los nacionales como el funcionamiento institucional. Entre sus propuestas de reforma, el CGCEE subraya expresamente la eliminación de la renuncia como paso necesario para obtener la nacionalidad por opción, reclamando una aplicación efectiva del *ius sanguinis*, sin pérdidas involuntarias de nacionalidad ni saturación de los consulados.

La raíz de esta norma se encuentra en la legislación heredada del franquismo, cuando el régimen imponía la renuncia como expresión de fidelidad exclusiva al Estado. Su pervivencia en la actualidad constituye una anomalía legal que no se corresponde con el espíritu de una democracia consolidada. En este sentido, su supresión debe entenderse también como un acto de reparación y actualización normativa en el marco de los valores que impulsa la Ley de Memoria Democrática: avanzar hacia un ordenamiento jurídico más inclusivo, igualitario y respetuoso con los derechos fundamentales.

Por otro lado, cabe señalar que muchos países no solo permiten a sus ciudadanos conservar la nacionalidad originaria, sino que impiden o dificultan legalmente su renuncia. Esto ocurre tanto en Estados democráticos como en otros con legislaciones más rígidas. En muchos casos, como se ha documentado, la renuncia a la nacionalidad implica restricciones para retornar, recibir herencias, conservar propiedades o acceder a beneficios legales o sociales en el país de origen. Esta imposición crea una situación jurídica gravosa e innecesaria para personas que ya han demostrado arraigo y compromiso con la sociedad española.

Desde una perspectiva funcional, no existen pruebas de que la renuncia formal tenga efectos medibles sobre la lealtad, el respeto a la Constitución o la participación

ciudadana de los nuevos nacionales. Por el contrario, las experiencias comparadas demuestran que permitir la doble nacionalidad fortalece la vinculación emocional y cívica de las personas extranjeras con su país de acogida, al tiempo que les permite mantener lazos legítimos con su país de origen. Lejos de crear una ciudadanía ambigua o dividida, se promueve una ciudadanía moderna, plural y acorde con los principios democráticos y de libertad individual, a su vez que se refuerzan los vínculos económicos y sociales con los países de origen.

La supresión del artículo 23.b) facilitaría la simplificación administrativa del proceso de nacionalización, eliminando trámites innecesarios y acercando el procedimiento a estándares internacionales. Esta reforma resulta no solo oportuna sino también coherente con el marco jurídico de la Unión Europea, en el que los Estados miembros avanzan hacia fórmulas de ciudadanía inclusiva, intercultural y adaptada a las realidades de la movilidad global.

Finalmente se suprime el apartado a) del artículo 25.1 del Código Civil que establecía la pérdida de nacionalidad de los españoles que no lo sea de origen por el uso exclusivo de la nacionalidad a la que estos hubieran decidido renunciar de manera expresa para la adquisición de la nacionalidad española al haber suprimido este requisito del artículo 24 del Código Civil.

Al amparo de lo expuesto, se presenta la siguiente Proposición de Ley.

Artículo único. *Modificación del Código Civil.*

El Código Civil queda modificado como sigue:

Uno. Modificación del artículo 22 del Código Civil.

El artículo 22 del Código Civil queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 22.

1. Para la concesión de la nacionalidad por residencia se requiere que ésta haya durado diez años bajo régimen de residencia o estancia, siempre que dicha permanencia haya sido legal, continuada e inmediatamente anterior a la solicitud. Serán suficientes cinco años para los que hayan obtenido la condición de refugiado y dos años cuando se trate de nacionales de origen de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal o de sefardíes.

2. [...]

3. En todos los casos, la residencia o estancia habrá de ser legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición.

A los efectos de lo previsto en el párrafo d) del apartado anterior, se entenderá que tiene residencia legal en España el cónyuge que conviva con funcionario diplomático o consular español acreditado en el extranjero.»

Dos. Supresión del apartado b) del artículo 23 del Código Civil.

Se suprime el apartado b) del artículo 23 del Código Civil, que establecía la obligación de renunciar a la nacionalidad de origen como requisito para la adquisición de la nacionalidad española por opción, carta de naturaleza o residencia.

El artículo 23 tras la supresión del apartado b) queda como sigue:

«Artículo 23.

Son requisitos comunes para la validez de la adquisición de la nacionalidad española por opción, carta de naturaleza o residencia:

a) Que el mayor de catorce años y capaz para prestar una declaración por sí jure o prometa fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y a las leyes.

b) Que la adquisición se inscriba en el Registro Civil español.»

Tres. Modificación del apartado 1 del artículo 24 del Código Civil que queda redactado como sigue:

«Artículo 24.

1. Pierden la nacionalidad española los emancipados que, residiendo habitualmente en el extranjero, adquieran voluntariamente otra nacionalidad y declaren expresamente su voluntad de renunciar a la nacionalidad española.»

Cuatro. Se suprime el apartado 1 del artículo 25 del Código Civil que queda redactado como sigue:

«Artículo 25.

1. Los españoles que no lo sean de origen perderán la nacionalidad:

a) Cuando entren voluntariamente al servicio de las armas o ejerzan cargo político en un Estado extranjero contra la prohibición expresa del Gobierno.»

Disposición adicional única. *Inscripciones en el Registro Civil.*

Para las inscripciones que deban practicarse en el Registro Civil como consecuencia de la concesión de la nacionalidad española conforme a lo dispuesto en la presente ley, será competente el Encargado del Registro Civil que lo fuera para la inscripción del nacimiento.

Disposición final. *Entrada en vigor.*

La presente ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

A la Mesa del Congrés dels Diputats

A l'empara del que s'estableix en l'article 124 i següents del vigent Reglament de la Cambra, el Grup Parlamentari Plurinacional Sumar, presenta la següent Proposició de Llei relativa a l'obtenció de la nacionalitat espanyola per residència i la conservació de la nacionalitat d'origen.

Palau del Congrés dels Diputats, 27 d'octubre de 2025.—**Viviane Ogou i Corbi** y **Candela López Tagliafico**, Diputadas.—**Aina Vidal Sáez**, Portaveu adjunta del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.

PROPOSICIÓN DE LEY RELATIVA A LA OBTENCIÓN DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA POR RESIDENCIA Y LA CONSERVACIÓN DE LA NACIONALIDAD DE ORIGEN

Exposició de motius

I

El marc normatiu espanyol en matèria de nacionalitat per residència s'ha mantingut pràcticament inalterat durant dècades, malgrat la profunda evolució del sistema d'estrangeria i de mobilitat internacional. En concret, l'article 22.1 del Codi Civil exigeix una residència legal, continuada i immediatament anterior durant un mínim de deu anys per a sol·licitar la nacionalitat espanyola, excloent expressament del còmput els períodes d'estada, fins i tot quan aquesta hagi estat plenament legal, autoritzada i fiscalitzada per l'Administració de l'Estat. Aquesta omisió no reflexa la complexitat actual del sistema migratori espanyol, que distingeix entre residència i estada, però reconeix totes dues com a formes de permanència legal.

L'autorització d'estada per estudis, pràctiques o recerca permet a milers de persones estrangeres residir a Espanya durant anys, de manera legal i regular, per a formar-se o contribuir al sistema acadèmic, científic i tècnic del país. No obstant això, aquests anys no són reconeguts a l'efecte de nacionalitat, la qual cosa suposa una exclusió jurídica sense justificació objectiva ni proporcional. Encara que els estudiants internacionals resideixen de facto a Espanya, paguen lloguer, serveis, consumeixen en el mercat nacional, cotitzen en molts casos a la Seguretat Social, i compleixen amb els deures fiscals, no se'ls reconeix el seu temps d'estada a l'efecte de nacionalitat. Aquesta situació crea una desigualtat estructural que ha de ser corregida. A això se suma una contradicció difícil de justificar: a efectes fiscals, aquests estudiants són considerats residents, havent de declarar els seus ingressos globals a Espanya conforme al règim general, sense que existeixi cap distinció. És a dir, per a les obligacions són residents, però per als drets no se'ls reconeix com a tals. Aquesta incoherència reflecteix un tractament jurídic desigual i inconsistent.

El canvi normatiu que va separar la residència de l'estada, passant a classificar als estudiants com a mers «visitants», ha generat una exclusió injustificada que s'ha perpetuat durant més de dues dècades. Tot i què en els anys 2000 i 2001 es parlava de «residència per estudis», a partir de l'any 2002 es va produir aquest gir legislatiu que va desdibuixar la condició de permanència regular de milers de joves al nostre país. El més greu és que aquesta categoria s'assimila a la d'un turista, la qual cosa resulta obertament incompatible amb el grau d'integració que implica cursar estudis superiors, pagar matrícules internacionals, formar part del teixit productiu i social, i fins i tot treballar de manera legal.

Aquesta exclusió ha provocat que el temps que passen a Espanya els estudiants sota règim d'estada no computi a l'efecte de nacionalitat, a diferència d'altres figures com la residència no lucrativa, que també impedeix treballar, o dels ciutadans comunitaris que poden residir a Espanya sense restriccions similars i els anys de les quals sí que són tinguts en compte. Aquesta discriminació és doblement injusta si es té en compte que molts d'aquests estudiants han contribuït econòmicament durant anys al sistema, han cotitzat mitjançant contractes de pràctiques, beques remunerades o treballs, i no obstant això veuen prolongat el seu accés a la nacionalitat fins als 14 o 16 anys, mentre que en la resta d'Europa els requisits són molt menors.

França, per exemple, exigeix cinc anys de residència legal, que poden reduir-se a dues si s'ha cursat educació superior al país; Bèlgica permet la sol·licitud després de cinc anys de residència contínua; i als Països Baixos o Suècia, el termini oscil·la entre els cinc i sis anys. És significatiu que fins i tot països amb governs tradicionalment més restrictius, com França o Bèlgica, computin el temps d'estada dels estudiants internacionals sense establir distincions excloents com les que manté Espanya. A més,

en la majoria d'aquests Estats membres no s'exigeix reiniciar el còmput des de zero després d'un canvi d'estatus migratori, la qual cosa reforça el seu atractiu com a destins per a talent internacional. Cap país de la UE imposa una distinció tan excloent com l'espanyola, i Espanya és l'únic que exigeix un termini tan llarg com deu anys sense reconèixer el temps previ d'estada legal.

La jurisprudència i la pròpia evolució administrativa de l'Estat han començat a corregir aquesta anomalia. Per primera vegada, en el Reial decret 42/2022, de 18 de gener, es fa referència a la fórmula «de residència o estada» en l'accés al Bo Lloguer Jove, reconeixent de facto que l'estada ha de tenir efectes jurídics equivalents a la residència en uns certs àmbits. Aquest avanç hauria d'estendre's a altres àrees clau com l'accés a la nacionalitat, per a evitar una contradicció normativa que afecta el principi d'igualtat. Aquest mateix llenguatge ha estat també adoptat en el nou Reial decret 1155/2024.

A més, convé recordar que els estudiants en règim d'estada han estat històricament exclosos d'ajudes públiques com les beques MEC o altres convocatòries estatals o autonòmiques. Per tant, l'Estat no ha assumit un cost rellevant en la seva formació, malgrat beneficiar-se del seu consum intern, la seva activitat econòmica i en molts casos de la seva cotització. A això se suma que, en molts casos, aquests estudiants han d'abonar taxes acadèmiques significativament més altes per ser extracomunitaris, incloent-hi penalitzacions per segones, terceres o fins i tot quarts matrícules. Resulta paradoxal que aquestes persones, després d'anys de contribució efectiva, es vegin obligades a recomençar el còmput de residència legal des de zero una vegada aconseguen canviar el seu règim a residència, prolongant injustificadament el seu accés a la plena ciutadania.

De fet, segons dades recents de l'OCDE i de l'informe Education at a Glance 2023, països com França, Alemanya i Països Baixos es troben entre les destinacions més atractives per a estudiants internacionals gràcies a polítiques migratòries orientades a l'atracció de mà d'obra qualificada i talent internacional. França, per exemple, supera els 370.000 estudiants internacionals matriculats; Alemanya més de 460.000; i Països Baixos més de 120.000, xifres molt superiors a les d'Espanya. Aquesta diferència s'explica, en part, pels incentius legals i el reconeixement efectiu del temps de permanència per a la integració i la ciutadania, elements que Espanya encara no ha alineat amb els seus objectius estratègics d'internacionalització universitària i atracció de talent.

A aquesta bretxa competitiva se suma una dada econòmica clau: els estudiants amb estada per estudis a Espanya han d'acreditar mitjans econòmics equivalents al 100 % de l'IPREM anual, és a dir, un mínim de 7.200 euros per persona. Segons les últimes dades oficials del Ministeri de l'Interior, a Espanya resideixen legalment més de 93.067 persones sota el règim d'estada per estudis a 31 de desembre de 2024. Això suposa, com a mínim, una injecció directa de més de 670 milions d'euros anuals procedents de l'estranger, que s'incorporen a l'economia nacional mitjançant consum, pagament de lloguers, serveis, transport, taxes universitàries i altres despeses vinculades. Malgrat aquesta contribució directa, aquestes persones continuen sent tractades com a visitants temporals i excloses del reconeixement d'arrelament que permet l'accés a la nacionalitat.

Modificar l'article 22 perquè contempli el temps de «residència o estada» com a criteri vàlid és una mesura de justícia i de coherència amb la realitat social i econòmica del país. Suposa reconèixer la contribució silenciosa de milers de joves formats en les nostres universitats, integrats en les nostres comunitats i compromesos amb el futur d'Espanya. Negar-los el reconeixement d'aquest temps suposa no sols una injustícia individual, sinó també una pèrdua col·lectiva en termes de talent, diversitat i projecció internacional.

II

L'article 23.b) del Codi Civil imposa, com a condició per a l'adquisició de la nacionalitat espanyola per residència, opció o carta de naturalesa, la renúncia expressa a la nacionalitat anterior. Si bé existeixen excepcions reconegudes per a nacionals de determinats països (com els iberoamericans, Andorra, Filipines, Guinea Equatorial o Portugal), el principi general continua sent el de l'exclusivitat nacional, un enfocament que resulta desfasat en el context jurídic actual i que planteja importants objeccions tant pràctiques com de coherència normativa.

En primer lloc, aquest requisit suposa una barrera innecessària i dissuasiva per a la integració de persones plenament arrelades a Espanya. Obligar a renunciar a la nacionalitat d'origen no sols imposa una ruptura formal amb el país de procedència, sinó també amb vincles afectius, familiars, culturals i fins i tot patrimonials. Aquesta exigència té un efecte desproporcionat sobre els sol·licitants, sense que això redundi en una major garantia de compromís amb l'Estat espanyol.

En segon lloc, la tendència internacional —i particularment europea— apunta cap al reconeixement generalitzat de la doble nacionalitat. França, Bèlgica, Itàlia, Suècia, Alemanya (des de 2024), Irlanda o Luxemburg permeten de manera ordinària la conservació de la nacionalitat d'origen. De fet, Espanya reconeix tàcitament la doble nacionalitat en múltiples contextos: no exigeix renúncia quan s'adquireix una altra nacionalitat amb posterioritat, ni la imposa als qui accedeixen a la nacionalitat espanyola en virtut de tractats específics. Aquesta incoherència evidencia que el principi d'exclusivitat no és indispensable ni sistemàticament aplicat.

A més, és profundament injust que aquest privilegi de conservar la nacionalitat d'origen estigui reservat a unes poques nacionalitats, mentre es nega a la resta de persones estrangeres igualment arrelades i compromeses amb el país. Aquest tracte desigual —per raons històriques o geopolítiques— manca de justificació jurídica sòlida i converteix a Espanya en un cas excepcional a nivell mundial. És probable que sigui un dels pocs, si no l'únic, Estats democràtics que encara mantenen aquest requisit amb caràcter general.

Aquesta situació, a més, contradiu el que ja ha estat assumit per òrgans de participació estatals: el propi Consell General de la Ciutadania Espanyola en l'Exterior (CGCEE) ha proposat eliminar aquest requisit, assenyalant que la seva supressió milloraria tant els drets dels nacionals com el funcionament institucional. Entre les seves propostes de reforma, el CGCEE subratlla expressament l'eliminació de la renúncia com a pas necessari per a obtenir la nacionalitat per opció, reclamant una aplicació efectiva del ius sanguinis, sense pèrdues involuntàries de nacionalitat ni saturació dels consolsats. L'arrel d'aquesta norma es troba en la legislació heretada del franquisme, quan el règim imposava la renúncia com a expressió de fidelitat exclusiva a l'Estat. La seva pervivència en l'actualitat constitueix una anomalia legal que no es correspon amb l'esperit d'una democràcia consolidada. En aquest sentit, la seva supressió ha d'entendre's també com un acte de reparació i actualització normativa en el marc dels valors que impulsa la Llei de Memòria Democràtica: avançar cap a un ordenament jurídic més inclusiu, igualitari i respectuós amb els drets fonamentals.

D'altra banda, és important assenyalar que molts països no sols permeten als seus ciutadans conservar la nacionalitat originària, sinó que impedeixen o dificulten legalment la seva renúncia. Això ocorre tant en Estats democràtics com en uns altres amb legislacions més rígides. En molts casos, com s'ha documentat, la renúncia a la nacionalitat implica restriccions per a retornar, rebre herències, conservar propietats o accedir a beneficis legals o socials al país d'origen. Aquesta imposició crea una situació jurídica onerosa i innecessària per a persones que ja han demostrat arrelament i compromís amb la societat espanyola.

Des d'una perspectiva funcional, no existeixen proves que la renúncia formal tingui efectes mesurables sobre la lleialtat, el respecte a la Constitució o la participació ciutadana dels nous nacionals. Per contra, les experiències comparades demostren que

permetre la doble nacionalitat enforteix la vinculació emocional i cívica de les persones estrangeres amb el seu país d'acolliment, al mateix temps que els permet mantenir llaços legítims amb el seu país d'origen. Lluny de crear una ciutadania ambigua o dividida, es promou una ciutadania moderna, plural i d'acord amb els principis democràtics i de llibertat individual.

La supressió de l'article 23.b) facilitaria la simplificació administrativa del procés de nacionalització, eliminant tràmits innecessaris i acostant el procediment a estàndards internacionals. Aquesta reforma resulta no sols oportuna sinó també coherent amb el marc jurídic de la Unió Europea, en el qual els Estats membres avancen cap a fórmules de ciutadania inclusiva, intercultural i adaptada a les realitats de la mobilitat global.

Finalment se suprimeix l'apartat a) de l'article 25.1 del Codi Civil que establia la pèrdua de nacionalitat dels espanyols que no ho sigui d'origen per l'ús exclusiu de la nacionalitat a la qual aquests haguessin decidit renunciar de manera expressa per a l'adquisició de la nacionalitat espanyola en haver suprimit aquest requisit de l'article 24 del Codi Civil.

A l'empara de l'exposat, es presenta la següent Proposició de Llei.

Article únic. Modificació del Codi Civil. El Codi Civil queda modificat com segueix:

U. Modificació de l'article 22 del Codi Civil.

«L'article 22 del Codi Civil queda redactat en els següents termes:

«Article 22.

1. Per a la concessió de la nacionalitat per residència es requereix que aquesta hagi durat deu anys sota règim de residència o estada, sempre que aquesta permanència hagi estat legal, continuada i immediatament anterior a la sol·licitud. Seran suficients cinc anys per a què hagin obtingut la condició de refugiat i dos anys quan es tracti de nacionals d'origen de països iberoamericans, Andorra, Filipines, Guinea Equatorial o Portugal o de sefardites.

2. [...]

3. En tots els casos, la residència o estada haurà de ser legal, continuada i immediatament anterior a la petició.

A l'efecte del que es preveu en el paràgraf d) de l'apartat anterior, s'entendrà que té residència legal a Espanya el cònjuge que convisqui amb funcionari diplomàtic o consular espanyol acreditat a l'estranger.»

Dos. Supressió de l'apartat b) de l'article 23 del Codi Civil.

Se suprimeix l'apartat b) de l'article 23 del Codi Civil, que establia l'obligació de renunciar a la nacionalitat d'origen com a requisit per a l'adquisició de la nacionalitat espanyola per opció, carta de naturalesa o residència.

Redacció de l'article 23 després de la supressió de l'apartat b):

«Article 23.

Són requisits comuns per a la validesa de l'adquisició de la nacionalitat espanyola per opció, carta de naturalesa o residència:

a) Que el major de catorze anys i capaç per a prestar una declaració per si juri o prometi fidelitat al Rei i obediència a la Constitució i a les lleis.

b) Que l'adquisició s'inscrigui en el Registre Civil espanyol.»

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie B Núm. 274-1

14 de noviembre de 2025

Pág. 11

Tres. Article tercer. Modificació de l'article 24.1 del Codi Civil.

«Article 24.

1. Perden la nacionalitat espanyola els emancipats que, residint habitualment a l'estranger, adquireixin voluntàriament una altra nacionalitat i declarin expressament la seva voluntat de renunciar a la nacionalitat espanyola.»

Quatre. Se suprimeix l'apartat 1 de l'article 25 del Codi Civil que queda redactat com segueix:

«Article 25.

1. Els espanyols que no ho siguin d'origen perdran la nacionalitat:

a) Quan entrin voluntàriament al servei de les armes o exerceixin càrrec polític en un Estat estranger contra la prohibició expressa del Govern.»

Disposició addicional única. *Inscripcions en el Registre Civil.*

Per a les inscripcions que hagin de practicar-se en el Registre Civil a conseqüència de la concessió de la nacionalitat espanyola conforme al que es disposa en la present llei, serà competent l'Encarregat del Registre Civil que ho fos per a la inscripció del naixement.

Disposició final. *Entrada en vigor.*

La present llei entrarà en vigor als vint dies de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat».

cve: BOCG-15-B-274-1